

FLASHES A.S.E.P.

ENERO - 2003

FICHA TECNICA

Diseño y Realización: De la investigación, del cuestionario y de la muestra:
A.S.E.P.

Diseño Muestral: 1.215 personas de uno y otro sexo, de 18 y más años, residentes en España. Muestra aleatoria estratificada por Comunidades Autónomas y estratos de municipios según su número de habitantes. Selección aleatoria de municipios y secciones censales dentro de cada estrato y de cada Comunidad Autónoma. Selección de hogares mediante sistema de rutas aleatorias dentro de cada sección censal. Selección final del entrevistado en cada hogar mediante cuotas de sexo y edad.

Trabajo de Campo: Realizado durante los días 13 al 18 de Enero de 2.003, mediante encuesta personal en el hogar de cada entrevistado, por la Red de Intercampo, S.A. Supervisión del trabajo de Campo realizado por A.S.E.P.

Proceso de Datos: Diseñado y realizado por A.S.E.P. con "software" propio, elaborado por J.D. Systems.

Análisis e Informe: Diseñado y realizado por A.S.E.P., y terminado el 29 de Enero de 2.003.

**DIRECCION:
JUAN DIEZ NICOLAS**

COPYRIGHT ASEP S.A., 2003. PROHIBIDA LA REPRODUCCION TOTAL O PARCIAL, INCLUSO CITANDO LA FUENTE.

"FLASHES"

(Enero 2003)

EL CONTEXTO SOCIAL, ECONÓMICO Y POLÍTICO

Los datos correspondientes a este mes de enero sugieren que la opinión pública española se encuentra en una situación de “stand by”, en el sentido de que todos los indicadores se mantienen en un nivel de insatisfacción, pesimismo y preocupación similares a los de diciembre, pero la buena noticia es que no han empeorado, y en algunos casos han tenido un cierto repunte, como es el caso de la valoración de instituciones (aunque no en la valoración de la mayoría de los líderes por los que se ha preguntado). Las consecuencias políticas de la catástrofe del Prestige siguen coleando, negativamente, para el Gobierno; la crisis de Oriente Medio, cada vez más centrada en si Estados Unidos atacará o no a Irak, amenaza con convertirse en otro mal trago para el Gobierno; las tensiones entre los posibles sucesores de Aznar comienzan a aflorar (como era lógico esperar); y el PSOE sigue sin ofrecer una alternativa de gobierno creíble, a pesar de las oportunidades que los diversos conflictos en que está inmerso el Gobierno le están proporcionando. En resumen, la situación nacional (Prestige, inflación y situación económica global, problemas sucesorios varios) y la situación internacional (conflicto palestino-israelí, Irak y Oriente Medio, hundimiento económico en América Latina, posible inicio de la era de utilización de armas nucleares en diferentes conflictos, la aparente incapacidad para recuperar Africa, la ampliación de Europa, el incremento de las desigualdades en el mundo) ofrecen tantos motivos de inquietud y preocupación que casi hacen añorar los dulces años de la “guerra fría”.

En el ámbito nacional, la opinión pública española está centrada en varias cuestiones. En primer lugar, en la catástrofe del Prestige, aunque cada día este problema va pasando a un segundo plano. El Gobierno ha reaccionado, tarde pero ha reaccionado, y ha ido tomando poco a poco todas las decisiones que tuvo que haber tomado desde el principio: creación de un comité científico que informe al Gobierno y a la opinión pública de la evolución del desastre y de las medidas que más razonablemente deben adoptarse, visitas “de trabajo” de los ministros y altos cargos más afectados por el desastre y sus consecuencias, celebración de un Consejo de Ministros en Galicia, nombramiento de un responsable especial para ese tema que no fuese miembro del Gobierno (sería muy difícil encontrar otra persona más cualificada para cumplir ese papel que el designado por el Gobierno, Rodolfo Martín Villa), ayudas y subvenciones para los afectados, y mayor coordinación con la Xunta. No parece razonable ver a

diario en televisión a todo un Vice-Presidente del Gobierno dar el parte sobre la probable dirección de los vientos y mareas o sobre los mejores métodos para luchar contra el chapapote. La opinión pública opina que la catástrofe del Prestige perjudicará electoralmente al PP y beneficiará al PSOE y al BNG, tanto en las elecciones autonómicas y municipales gallegas como en las del resto de España. Pero al mismo tiempo, ha mejorado la evaluación que la opinión pública hace de las instituciones más implicadas en esa catástrofe (con la única excepción del Gobierno de la Nación, cuya evaluación es igual que en diciembre, y la peor de todas las instituciones por las que se ha preguntado en ambas fechas). Sin embargo, el amplio paquete de ayudas para Galicia aprobado por el Gobierno en el Consejo de Ministros celebrado en La Coruña, que ha sido calificado de plan Marshall para esa región, seguramente ayudará a restaurar la imagen del Gobierno en Galicia y en el resto de España. Como dice el refrán, “las penas con pan son menos”. En cualquier caso, salvo que se produzca algún nuevo y grave desastre en relación con el Prestige, debe esperarse que este problema pase ya a un segundo plano. No obstante, alguno de sus efectos tendrá secuelas, como es el impacto que ha tenido ya sobre la imagen de Fraga y su gobierno. Parece bastante injusto que sea precisamente Fraga, a quien el PP ha “exprimido” para seguir ganando elecciones en Galicia y al tiempo retrasar los problemas que su sucesión generaría, quien al final vaya a ser el “chivo expiatorio”. Es muy probable que fuese necesario entregar alguna cabeza de la Xunta a causa del Prestige, pero de manera similar habría sido apropiado entregar alguna cabeza del Gobierno de la Nación, pues tal y como se han hecho las cosas toda la responsabilidad parece haber sido atribuida al gobierno del PP en Galicia, cuando sería más justo que las responsabilidades se repartieran entre los dos gobiernos, el autonómico y el nacional, y no necesariamente a partes iguales. La crisis en la Xunta está abierta, y sería ingenuo pensar que se ha cerrado después de los cambios de algunos “conselleiros”. Los resultados de las elecciones autonómicas y municipales confirmarán o refutarán esta afirmación.

Algunos comentaristas afirman que ha sido para desviar la atención de la opinión pública respecto al Prestige, otros que ha sido por razones electoralistas, pero lo cierto es que la iniciativa gubernamental para reformar la legislación penal ha obtenido la aprobación casi unánime del electorado, que venía pidiéndola desde hace años. Los datos que se presentan en la sección de Actualidad demuestran el aplastante e inequívoco respaldo de los españoles a estas reformas por tan largo tiempo demandadas. Esta iniciativa, sin lugar a dudas, le reportará al Gobierno buenos réditos electorales, porque este tipo de medidas sí llega a la gente, cada día más preocupada no solo por el terrorismo de ETA, sino por la delincuencia en general, y especialmente por la denominada “pequeña

delincuencia”. Ya se comprobó con respecto a la “kale borroka”, que la eliminación del “pequeño terrorismo” ha proporcionado otra imagen a la vida cotidiana en el País Vasco, y se comprobará ahora, que la eliminación de la “pequeña delincuencia” se notará inmediatamente en un incremento de la sensación de seguridad ciudadana. No debe pasarse por alto el hecho de que la opinión pública querría ir incluso más allá, hasta el punto de que más de la mitad de los entrevistados desearían que se aplicase “pena de cadena perpetua, es decir, hasta morir en la cárcel” a los terroristas convictos de asesinato, y que un 18% pediría incluso “pena de muerte” para estos terroristas. Es justo señalar que si el tema del Prestige ha sido un error, luego rectificado, del Gobierno, la reforma del Código Penal ha constituido todo un acierto.

Pero a los españoles les preocupa, además de la seguridad personal, la seguridad económica, y el último dato de inflación publicado no puede ser más negativo para el Gobierno. No es extraño que los indicadores económicos habituales se encuentren ya en niveles (por supuesto muy negativos) parecidos a los que había en 1995-96. Si la opinión pública reconoció los éxitos económicos del Gobierno del PP a lo largo de todo el período 1996-2000, no puede ahora decirse que se equivoca cuando evalúa muy negativamente la situación y perspectivas futuras de la economía nacional y la personal. La opinión pública tiene más olfato que lo que algunos políticos y analistas querrían admitir, en cuestiones económicas y en otras.

El Gobierno acierta también, y así se ha reconocido reiteradamente en estas páginas desde hace muchos años, cuando defiende la unidad de España y la Constitución. Los datos demuestran que un 87% de los entrevistados consideran muy o bastante importante “mantener la unidad de España”, y un 65% de ellos consideran igualmente importante que los símbolos nacionales (bandera, himno, lengua), tengan precedencia o prioridad sobre los símbolos autonómicos. Pero ese amplio consenso “constitucional” no se traslada íntegramente a las actuaciones del Gobierno en esos mismos ámbitos, o dicho de otro modo, los españoles consideran muy mayoritariamente que es importante mantener la unidad de España, pero pueden discrepar de las actuaciones del Gobierno de turno (en este caso el del PP), para lograr ese fin, lo que indirectamente sugiere que posiblemente el Gobierno debería reflexionar no sobre los fines, que parecen tener un amplio respaldo, sino sobre los medios. En todo caso, y también se ha reiterado aquí en diversas ocasiones, es posible que el PSOE deba reflexionar también sobre su posicionamiento, parece que no del todo claro, sobre estas cuestiones, que en cierto modo pueden constituir obstáculos de la máxima importancia para lograr el apoyo de ciertos segmentos de

electores que son los que conceden en último término la victoria electoral a uno u otro partido.

El tema de la sucesión, finalmente, subyace o sobrevuela toda la política nacional. La sucesión de Aznar no es la única, por supuesto. Ya se ha mencionado la de Fraga, que no estará exenta de tensiones y conflictos internos, agravados por la crisis del Prestige y la falta de entendimiento entre el Gobierno Nacional y el Autonómico del PP, como se ha demostrado en la resolución de la crisis de gobierno en la Xunta. La pugna entre los alineados con Rajoy y los de Fraga, entre los caciques rurales y los ejecutivos urbanos, y los diversos (pero muy potentes) intereses económicos en juego se harán patentes en los próximos meses. El nombramiento de Romay para el Consejo de Estado tampoco es ajeno a esas tensiones internas y luchas por el poder en el PP gallego.

La sucesión de Pujol tampoco será fácil, como no lo es la sucesión de ningún líder carismático y que lleve mucho tiempo en el poder. Las actuaciones de Mas demuestran lo difícil que resulta afianzar un nuevo estilo de liderazgo, y lo difícil que es liderar un partido nacionalista sin caer en el separatismo-independentismo, equilibrio en el que Pujol ha sido maestro. Todos los datos disponibles sugieren que el PSC puede superar a CiU en las próximas elecciones municipales, y luego en las autonómicas, y ese será el problema de Mas, que posiblemente tenga que verse obligado a recurrir, otra vez, al apoyo del PP. Su afirmación rimbombante de que en su gobierno nunca tendrá consejeros del PP no es sino un “brindis al sol”, puesto que CiU ha tenido (tiene en estos momentos) el imprescindible respaldo parlamentario del PP, sin el cual no habría podido gobernar, pero nunca ha tenido ningún consejero del PP, por lo que dicha afirmación de principios ni es original ni debe interpretarse en la clave que Mas pretende.

En cuanto a la retirada de Arzallus, anunciada por él mismo, puede que constituya la mejor noticia imaginable para el País Vasco. Ciertamente el País Vasco ha dejado de acaparar los titulares diarios de todos los medios, como sucedía hace meses y años. Y sería razonable pensar que el PNV ha constatado lo equivocado de su política independentista, teniendo en cuenta la actual debilidad de ETA (acosada policial y judicialmente, e internacionalmente, como no lo había estado nunca). Los nacionalismos están en baja, y eso lo saben muy bien los dirigentes de partidos nacionalistas en Cataluña, País Vasco y Galicia, y sobre todo están en baja los nacionalismos-independentistas. Por ello, la ausencia de protagonismo informativo del País Vasco podría deberse a que el PNV está dialogando “sotto voce” con el PSOE y con el PP. Por ello, también, algunos comentaristas han ido más lejos, y han relacionado este nuevo clima con la

inexplicable ausencia de Mayor Oreja en la votación de los presupuestos del Gobierno Vasco para el ejercicio 2003, de igual manera que pareció tentador relacionar ese nuevo clima (si es que realmente existe) con algunos otros hechos ya mencionados en los FLASHES de diciembre. Lo que parece indudable es que el nacionalismo-independentista vasco no está recibiendo la comprensión y los apoyos que recibieron en otros tiempos de los Estados Unidos y de algunos países europeos.

Finalmente, la sucesión de Aznar continúa siendo una incógnita. La reciente convención del PP no solo no ha dado ninguna clave, sino que ha reforzado la imagen de Aznar como líder máximo e insustituible. Su sorpresiva declaración de haber decidido figurar en la lista municipal del PP por Bilbao en el último lugar, aparte de su indudable valor moral y testimonial, acaparó todo el protagonismo de la Convención, de manera que eclipsó totalmente la convención del PSOE, pero también la del PP, hasta el punto de que la opinión pública (y los medios de comunicación) no prestaron atención a lo que se trató en ambas convenciones. Por otra parte, Rato parece haber roto “la ley del silencio” y se ha postulado como sucesor, pero Mayor Oreja y Rajoy, cada uno a su manera, también lo están haciendo, puede que más indirectamente. Arenas descartaba en una entrevista periodística a Ruiz Gallardón como candidato a la sucesión, pero el propio Ruiz Gallardón se ha apresurado a desmentirlo, afirmando que podría ser o no serlo después de las elecciones municipales. Queda todavía más de un año para las elecciones generales, y en ese tiempo puede pasar de todo, incluido el que se produzca una situación nacional o internacional que requiera, por su gravedad, la continuidad del liderazgo de Aznar. Este, por su parte, después de haber sufrido toda clase de acontecimientos adversos desde el verano (decretazo, huelga general, críticas a la boda de su hija, Perejil, Prestige, crisis en relación con Irak, etc.), ha visto renacer sus esperanzas de ser un firme candidato a una de las dos presidencias europeas propuestas por Francia y Alemania e inmediatamente respaldadas por España, Reino Unido e Italia. Pero, volviendo a la sucesión, la opinión pública española sigue respaldando mayoritariamente a Mayor Oreja como el candidato más valorado, más probable y más deseado para suceder a Aznar. Sin embargo, algunos analistas afirman que esa es la razón principal para descartarle. Lo único cierto es que sigue habiendo muchos candidatos, y que cualquier análisis puede llevar a descartar a cada uno de ellos o, por el contrario, a demostrar su idoneidad para ser el elegido, aunque cabe preguntarse, el elegido ¿de quién?, ¿del pueblo, de los militantes del PP, del aparato de Génova, del Presidente saliente? La historia sugiere que el poder político no se hereda (salvo en las monarquías hereditarias) sino que se conquista, y de momento parece que la mayoría de los candidatos están esperando a que les caiga la herencia, pero otros (sobre todo uno concreto)

llevan años luchando para lograr el poder, y por lo que parece siguen luchando por alcanzarlo.

El panorama nacional, por tanto, parece ofrecer variados ejemplos de aciertos y errores por parte del Gobierno que, lógicamente, se reflejan en las intenciones de voto para futuras elecciones, intenciones que otra vez este mes son favorables al PSOE, de manera que la estimación de voto concede un punto y medio porcentual más a este partido que al PP. Pero el PP no es el único protagonista, y por tanto debe también examinarse la actuación del PSOE, aunque esta labor es más difícil debido a que no gobierna, y por tanto solo se puede juzgar su labor de oposición, que es menos brillante y espectacular. En la crisis del Prestige aprovecharon los primeros momentos, pero Caldera cometió un error imperdonable en su acoso a Rajoy, y salió “trasquilado”. Ahora, y sobre todo después del Consejo de Ministros celebrado en el Ayuntamiento socialista de La Coruña, parece que al PSOE le quedan ya pocas bazas en esta partida. Como decía Cela, “el que resiste gana”. En la crisis de Irak, que luego se comentará, el PSOE ha adoptado una postura clara contra la participación en la guerra si ésta es unilateral, según declaraciones muy recientes de Rodríguez Zapatero, un matiz muy importante, puesto que deja la puerta abierta a la aceptación de la intervención en Irak siempre y cuando la decisión esté amparada por otros países. Durante unos días, sin embargo, el PSOE capitalizará todas las simpatías de los que se oponen a la guerra, y cuando una coalición, con o sin permiso de Naciones Unidas, intervenga en Irak, siempre podrán decir que ellos solo se comprometieron a impedir la intervención unilateral, pero no una intervención multilateral, de una alianza. Pero el principal problema del PSOE sigue siendo la sensación de que no tienen un liderazgo indiscutible, y que Rodríguez Zapatero tiene más problemas dentro que fuera del partido, porque no hay una línea o programa bien definidos en materias tan importantes como la afirmación de la unidad de España y una posición clara y firme respecto a los nacionalismos-independentistas, respecto a la inmigración ilegal o no-documentada, respecto a la colaboración o no-colaboración con los Estados Unidos si finalmente éstos inician un ataque sobre Irak, respecto a la legislación penal para terroristas y delincuentes en general, etc. En el PP hay una coherencia y una línea clara de actuación, con la que se estará de acuerdo o no, pero que es conocida, respecto a las cuestiones más importantes para los españoles, mientras que en el PSOE no se percibe esa coherencia ni esa claridad, sino más bien al contrario, lo que se observa es ambigüedad, cuando no contradicciones en las declaraciones y hechos de diferentes líderes. Ese es el principal problema del PSOE, y el que puede ser su principal obstáculo para llegar al Gobierno de la Nación.

Se ha dejado para el final el problema más preocupante, para España y para el mundo en general, que existe en la actualidad, es decir, la amenaza de guerra en Oriente Medio. Este es un problema de tal magnitud que puede provocar (ya está provocando) la ruptura de la tradicional alianza entre los Estados Unidos y Europa, y que puede hacer caer gobiernos en Estados Unidos y en Europa, pues las opiniones públicas y las de los propios gobiernos están muy divididas en estos momentos. Pero puede además desencadenar un conflicto internacional de gran magnitud que afecte no solo a Irak, sino a toda esa zona de Oriente Medio, conflicto del que no podrían (ni querrían) mantenerse al margen otras potencias mundiales importantes como China o Rusia. En realidad, la actual situación es la mejor demostración de lo equivocado que estaba Huntington cuando preconizaba el “clash” de civilizaciones, cuando es evidente que en el conflicto que se avecina las distintas civilizaciones van a estar muy divididas en su visión de la crisis y en su participación en ella. Habrá países islámicos al lado de Irak y en contra de Irak, y habrá diferentes planteamientos y participaciones de los países “occidentales” respecto a una intervención en Irak.

Desde hace meses se ha escuchado a los Estados Unidos afirmar que tienen pruebas de que Irak tiene armas de destrucción masiva, pero no se comprende por qué no las han puesto en conocimiento no ya de la opinión pública (que posiblemente no sabría evaluarlas) sino ni siquiera de los inspectores de Naciones Unidas que están buscándolas “in situ”, ni de las cancillerías de los países cuya ayuda y respaldo se solicita y/o exige. Esta situación era extraña, puesto que si disponían de esas pruebas desde hace tiempo, lo lógico habría sido exponerlas “urbi et orbe” con el fin de evitar las críticas que están recibiendo de la opinión pública mundial, e incluso para forzar a Sadam Hussein a destruirlas. Ahora, y precisamente con ocasión de la presentación del informe de los inspectores ante el Consejo de Seguridad de la ONU parece haberse desvelado el misterio. Se están buscando depósitos de “antrax” y misiles Scud.....que al parecer Estados Unidos proporcionó a Sadam para su guerra con Irán, cuando los “malos” eran los ayatollah y los “buenos” eran los iraquíes. Por eso los Estados Unidos sabían que Irak tiene esas armas de destrucción masiva, pero no especificaba las pruebas porque ellos eran precisamente los responsables de que las tuviera. La forma en que los Estados Unidos han llevado todo este proceso da pie a que se piense, como piensan muchos críticos, que los Estados Unidos no quieren realmente solucionar el problema, sino que desde el primer momento (antes incluso del 11 de septiembre) han tenido decidido invadir Irak, y que muy posiblemente la presentación de las pruebas vaya acompañada, de forma inmediata, por la invasión de Irak.

Por otra parte, y aclarado ese aparente misterio, parece que en este proceso se está invirtiendo el proceso habitual en el terreno jurídico. En efecto, lo normal es que el que acusa debe demostrar la culpabilidad del acusado, lo que en este caso implicaría demostrar con pruebas que Irak posee armas de destrucción masiva y que piensa utilizarlas. Sin embargo, lo que se está pidiendo a Irak es que demuestre su inocencia, es decir, que demuestre que no tiene esas armas de destrucción masiva y que además no tiene intención de utilizarlas. El nuevo concepto que se quiere invocar, la “guerra preventiva”, puede tener muy graves e imprevisibles consecuencias, sobre todo si, después de aceptarse en el ámbito internacional se trasladase al ámbito nacional público (el poder tendría derecho a exterminar a grupos de personas por estimar que pretendían subvertir el orden), o al ámbito privado (el poder tendría derecho a detener y condenar a personas antes de que cometieran un delito bajo la presunción de que iban a cometerlo, una situación que ya ha sido llevada al cine muy recientemente, y ya se sabe que lo que un ser humano es capaz de imaginar otro puede llevarlo a la práctica, o lo que es igual, que “la realidad supera siempre a toda fantasía”).

En cuanto a España, el Presidente del Gobierno no ha considerado oportuno hasta ahora informar oficialmente de su posición presente y futura sobre este importante asunto al Congreso de los Diputados. Ahora ha anunciado que acudirá al Congreso de los Diputados el 5 de febrero, precisamente el mismo día en que Bush ha anunciado que dará a conocer las pruebas de que Irak tiene armas de destrucción masiva. No parece que esa coincidencia de fechas haya sido casual, y en todo caso cabe preguntarse por qué España parece estar teniendo un papel tan fundamental, que ha hecho que el Presidente Aznar tuviese conocimiento de las pruebas (como se ha dejado traslucir a los medios), cuando otros Presidentes europeos no han tenido acceso a ellas. Todos los demás Presidentes de países europeos han informado directamente a sus parlamentos, no a través de sus ministros de Asuntos Exteriores, sino personalmente, y en muchos casos no una, sino en varias ocasiones. Es muy posible que Aznar tenga sus razones para actuar así, pero la experiencia del Prestige aconsejaría haber hecho las cosas “cuando tocaba”, y no retrasarlas, porque el retraso puede ser peor. La opinión pública española está absolutamente en contra de la intervención en Irak, más en contra de lo que estuvo respecto a la intervención en la primera guerra del Golfo, en Bosnia o incluso en Kosovo (que ya es decir), como lo demuestran a diario los artículos, comentarios y declaraciones de personalidades nada sospechosas de “antiamericanismo”, ni de ser profesionales del “progresismo” (en su sentido peyorativo) ni críticos habituales del PP. Pero si el Gobierno ha creído tener razones para intervenir o para respaldar que otros intervengan, lo mejor que podía haber

hecho es comenzar cuanto antes una labor didáctica de información a los representantes del pueblo en el Parlamento, y a los medios de comunicación, para que unos y otros hubieran hecho de correas de transmisión con la sociedad, que tiene todo el derecho a saber en qué nos metemos, por qué y para qué. El secreto, los “cuadernos azules” y la prudencia informativa sobre las decisiones a tomar pueden estar justificadas en el interior de un partido, siempre y cuando sus militantes lo consientan, pero no es aceptable cuando lo que está en juego es algo tan importante para una sociedad como el entrar o no entrar en guerra. El Gobierno Español, y su Presidente, tienen la obligación moral de informar y dialogar con los demás partidos, especialmente con el principal de la oposición, de informar y debatir en el Parlamento, y de informar a la sociedad sobre las posibles actuaciones futuras en los distintos foros en que España está presente (la Unión Europea, el Consejo de Seguridad, etc.). No informar, en estas circunstancias, puede deberse a que el Gobierno realmente no sabe qué dirección tomar y está a la espera de lo que hagan otros, lo que sería grave, o que no puede decir lo que va a hacer porque piensa que la sociedad no le va a comprender o no le va a apoyar, lo que sería incluso más grave.

El Gobierno inglés ha definido claramente su posición en el Parlamento y en los medios de comunicación. Así lo han hecho también la mayoría de los países europeos, y muy recientemente y de forma muy clara Francia y Alemania. Incluso el Presidente de la Comisión Europea, Romano Prodi, ha expresado en diversas y recientes ocasiones, públicamente, su preocupación por el inicio de la guerra y su petición de mantener la paz. Hasta el Papa ha mostrado su oposición a una guerra preventiva. Pero los españoles seguimos sin conocer directamente la opinión del Gobierno español sobre si considera necesario o no una nueva resolución de Naciones Unidas para iniciar la intervención en Irak (opinión que sí han dado públicamente otros gobiernos europeos que, al igual que España, forman parte del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas). Sí sabemos que si las Naciones Unidas aprueban una nueva resolución autorizando la intervención en Irak, España la respaldará, decisión que parece aceptable y razonable. Pero no sabemos que hará España si no hay tal resolución y Estados Unidos inicia la intervención en Irak por decisión unilateral. El Gobierno Español, como otros, puede dar su opinión, aunque luego acepte alinearse con la mayoría en el Consejo de Seguridad o en la Unión Europea, bien porque los argumentos que den otros países le convenzan, o por contribuir al consenso. No habría nada malo ni deshonesto en ese proceder. La democracia requiere legitimidad en el origen del poder, y el Gobierno Español la tiene sin la más mínima duda, con una mayoría absoluta obtenida limpiamente y sin la menor sombra de duda en las

pasadas elecciones. Requiere también representatividad, y el Gobierno Español la tiene también por las mismas razones, pero sobre todo porque además de una mayoría absoluta de escaños obtuvo una amplia mayoría de los votos, con gran diferencia sobre el PSOE. Pero una tercera dimensión del gobierno democrático es “la rendición de cuentas”, y esa se debe hacer de manera permanente ante los representantes del pueblo en el Parlamento y ante la sociedad a través de los medios de comunicación. Lo que los españoles quieren es más información por parte de su Gobierno legítimo, el de todos, pues especialmente ante una guerra, más que en ninguna otra circunstancia, es el Gobierno de todos los españoles, lo hayan votado o no.

Parece evidente que en el gobierno de Bush hay una mayoría de personas que tenían diseñada la estrategia para tomar el control de todo Oriente Medio, por razones del negocio del petróleo y por razones de geopolítica, desde la primera guerra del Golfo, y han aprovechado el cruel atentado de las Torres Gemelas para llevar a la práctica inmediatamente ese plan. Es así como se han establecido en Kuwait para protegerle de Irak y establecer un régimen democrático, y como se han establecido en Afganistán mientras buscaban a Ben Laden, y para establecer un régimen democrático. Por ello, y con independencia del sentimiento unánime que parece existir hacia Sadam Hussein (las encuestas de ASEP han demostrado que su valoración ha sido siempre la más baja de cualquier otro líder o personaje por el que se ha preguntado, incluso más baja que la de Bush), parece evidente que los Estados Unidos tienen tomada la decisión de intervenir militarmente en Irak aunque Sadam acepte y cumpla con todos los requisitos que se le exijan, pues es seguro que surgirá una excusa que justifique la intervención, como en su momento surgió Ben Laden. Por eso, en esta ocasión, los Estados Unidos no encuentran el respaldo que en su momento encontraron para la primera guerra del Golfo o para la invasión de Afganistán, y esa falta de respaldo es especialmente notable en muchos países europeos, lo que pone en riesgo la tradicional alianza atlántica. La Unión Europea, en su reciente reunión de Ministros de Asuntos Exteriores, ha expresado su opinión unánime de que se de más tiempo a los inspectores para encontrar pruebas. Ahora ya se sabe con certeza que es lo que los inspectores deben buscar. Incluso pueden exigir a Sadam que dé pruebas inequívocas de lo que ha hecho con el armamento de destrucción masiva que le entregaron los norteamericanos, especialmente los depósitos de “antrax” y los misiles Scud, si los ha destruido, si los ha entregado a Al Qaeda, o si todavía los tiene. Los cuatro países de la Unión Europea que son miembros del Consejo de Seguridad también han pedido más tiempo para que los inspectores concluyan su misión. Es posible que al final esté justificado intervenir militarmente en Irak, pero lo que parece evidente es que no existe una gran urgencia, pues Irak no ha hecho el más mínimo gesto que

indique que va a agredir a ningún país. Por eso, cuantos más argumentos se acumulen para justificar la intervención, mayor será el respaldo que ésta obtenga de la comunidad internacional y de la opinión pública mundial, que en estos momentos está muy polarizada en contra de la intervención. La reacción no solo de la opinión pública, sino de toda clase de líderes y personas de gran relieve social, no ha tenido precedentes en otros conflictos, y ello es cierto no solo en España, sino en todo Europa, e incluso en los Estados Unidos, donde el movimiento contra la intervención ha adquirido una importancia inusual. No parece razonable pensar que tantas personas están equivocadas y que solo unos pocos están en posesión de la verdad. Pero incluso si eso fuese así, lo razonable es que los que conocen la verdad la compartan.

Por otra parte, y en este contexto de desencuentros entre Estados Unidos y la Unión Europea, Rumsfeld ha dejado claro lo que algunos temían, que la ampliación de Europa se hace para controlarla mejor. Su desafortunada pero elocuente referencia a Alemania y Francia como la “vieja Europa” ha eliminado las dudas que algunos pudieran tener. Son muchos los que creen que Estados Unidos, a través del Reino Unido, ha pretendido controlar la Unión Europea. Primero se intentó impedir el éxito del Mercado Común mediante la creación de la EFTA (Inglaterra y algunos países nórdicos). Cuando esa estrategia fracasó, se promovió la entrada de todos ellos en la Comunidad Europea para controlarla desde dentro. Se intentó impedir el establecimiento del euro, y luego se ha intentado minar la economía europea mediante conflictos en zonas de producción de petróleo, mediante operaciones dudosas en las principales bolsas del mundo, y finalmente mediante guerras en las fronteras de la Unión Europea. El último intento para que fracase el proyecto europeo parece haber sido la apresurada ampliación, antes de que se haya consolidado la Europa de los 15 en los aspectos contemplados en el segundo y el tercer pilar, a un conjunto de países del Este apadrinados por los Estados Unidos, que primero los incorporó a una OTAN que ya tampoco les obedecían ciegamente. Se trata del viejo lema, “si no puedes luchar contra ellos, únete a ellos”. Este es un juego peligroso en el que parecen haberse adentrado los Estados Unidos, y que puede tener consecuencias negativas no sólo para Europa, sino también para los Estados Unidos. Otra cosa es, por supuesto, que la ampliación de Europa, aún en estas circunstancias y aunque fuesen ciertos los planes atribuidos a los Estados Unidos, no pueda ser beneficiosa para la construcción de Europa a largo plazo, aunque haya que superar más problemas de los que se habían previsto.

Según las reglas del supremo y más antiguo juego de estrategia del que probablemente han surgido todos los demás, el GO, no parece aconsejable

tener muchos puntos de conflicto al mismo tiempo. Actualmente los Estados Unidos pueden llegar a encontrarse con varios frentes abiertos al mismo tiempo, cada uno de los cuales puede ser individualmente controlado, pero es posible que no todos al mismo tiempo. Así, la apertura del frente en Irak puede ampliarse a países limítrofes, y aunque es previsible que inmediatamente Israel colabore en la zona (llevan un año y medio aprovechando la confusión para exterminar a Palestina), existe el riesgo de que se abra el frente en Corea del Norte (aunque los Estados Unidos no quieran, como parece, abrir ese frente). Pero también existe la posibilidad de que se abra el frente India-Pakistán (dos potencias nucleares). Y, sobre todo, y este es un tema del que nadie parece querer hablar más que en voz baja, está la incógnita de qué piensa China de todo esto. China está en un proceso acelerado de desarrollo industrial, para el que necesitará petróleo en grandes cantidades, y ese petróleo le tiene que llegar de Rusia (que actualmente y en base a sus acuerdos con Occidente lo está vendiendo en estos mercados) o de Oriente Medio (que está a punto de pasar a ser controlado también por Estados Unidos y sus aliados). ¿Se quedará China esperando? ¿Es la actual política americana respecto a Irak y a todo Oriente Medio una clarividente actuación que pretende anticiparse a una previsible actuación de China para hacerse con esa reserva petrolífera? Esa también sería una “jugada” típica de GO.

EL CLIMA DE OPINIÓN

Con el fin de aclarar diversas consultas recibidas en ASEP sobre la fecha en que se realizan las entrevistas de cada sondeo y la de otros institutos de opinión, ASEP desea aclarar que el avance de resultados llega a sus clientes a la semana de haber finalizado las entrevistas, y el informe completo sobre La Opinión Pública de los Españoles, los Flashes, y en su caso el informe sobre Liderazgo Corporativo, llega a los clientes a las dos semanas (e incluso antes) de haber finalizado el trabajo de campo. Otros institutos publican sus resultados con plazos más largos. Concretamente, el sondeo ASEP de este mes se entrega a los clientes el jueves 30 de enero, cuando las entrevistas fueron realizadas entre el 13 y el 19 de enero.

Como ya se ha indicado, el clima general de opinión de este mes puede caracterizarse como de estabilidad dentro de la situación de insatisfacción y pesimismo que caracterizó al mes de diciembre. Es decir, la situación no ha empeorado, pero tampoco ha mejorado, aunque algunos indicadores puedan haber mejorado levemente respecto a diciembre, sin que ello pueda realmente interpretarse como mejoría, sino más bien como estabilidad.

Así, de los dos indicadores principales relativos a la situación económica nacional, el Sentimiento del Consumidor se mantiene en el mismo nivel que en diciembre, y la Evaluación de la Situación Económica ha mejorado cinco puntos. Pero ello significa que el Sentimiento del Consumidor continúa en el nivel más bajo desde 1995, y la Evaluación de la Situación Económica en el segundo valor más bajo desde 1995 (el más bajo fue el de diciembre pasado). Por supuesto, los dos indicadores se mantienen significativamente por debajo del nivel de equilibrio (80 y 71 puntos respectivamente en una escala de 0 a 200). Puede por tanto afirmarse que los españoles siguen estando muy preocupados por la situación económica nacional y por su propia situación económica personal.

Los dos indicadores de ahorro se han desplomado hasta niveles similares a los de 1996. Ello no debe interpretarse en este caso, como se ha dicho a veces en meses anteriores (cuando los cambios eran más pequeños y seguían una tendencia descendente a lo largo de varios meses), en el sentido de que los españoles perciben una mejora de la economía y por eso ahorran menos y consumen más. Muy al contrario, eso significa que la tendencia de meses anteriores de incremento del ahorro a costa del consumo como consecuencia de una negativa percepción de la situación y el futuro económicos, no ha podido continuar porque la gente ya no puede ahorrar aunque quiera, y que incluso comienza a tener que utilizar sus ahorros para vivir. Puede que en este mes se hayan combinado las dificultades propias de un mes de enero (todos los indicadores publicados sobre las ventas comerciales durante las pasadas Navidades parecen coincidir en que los españoles han gastado mucho menos en estas fiestas que en las de años precedentes) y el pesimismo respecto al futuro a causa de la posible guerra en Irak.

El Optimismo Personal, que mide la confianza y satisfacción con la propia situación económica personal y su evolución previsible, disminuye otra vez este mes y vuelve a situarse por undécimo mes consecutivo por debajo del nivel de equilibrio, y alcanza su valor más bajo desde finales de 1994 (15 puntos por debajo del nivel de equilibrio). La proporción de post-materialistas, que se había mantenido en el nivel del 40% y más durante casi todo el año 2001, pero que se había mantenido por debajo del 40% durante casi todo el año 2002, indicando que los españoles se sentían más preocupados por su seguridad personal y económica que por los nuevos valores de auto-expresión, participación social y calidad de vida, vuelve a situarse por debajo del 40%, lo que implica que la mayoría de los españoles siguen concediendo más importancia a la seguridad personal y a la seguridad económica (mantener el orden y luchar contra la subida de

precios) que a los nuevos valores de participación social, calidad de vida, etc..

En cuanto a los indicadores políticos, la Satisfacción con el funcionamiento de la Democracia se mantiene en su habitual alto nivel, e incluso mejora un poco respecto a diciembre. Y la Satisfacción con el Gobierno aumenta levemente este mes, pero continúa situándose algo por debajo del nivel de equilibrio, como ya lo hizo el mes pasado. La exposición a la información sigue también en un nivel próximo al de equilibrio, e incluso parece haberse incrementado algo este mes, hasta el punto de que alcanza el valor más alto de los últimos doce meses. En cuanto a los indicadores relativos a la Unión Europea, todos ellos muestran valores similares pero algo inferiores a los de los meses precedentes, con valores bastante altos que indican una clara satisfacción por pertenecer a la UE y una indiscutible percepción de beneficios (más que de perjuicios) para España, para la Comunidad Autónoma y para el propio entrevistado derivados de esa pertenencia. La persistencia de estos valores indica que las actitudes de los españoles hacia la Unión Europea están muy consolidadas, al menos de momento.

La imagen de instituciones y líderes ha mejorado algo respecto a diciembre, pero las valoraciones que reciben continúan en niveles más bajos que las recibidas antes de diciembre, lo que parece poder interpretarse como que persiste la insatisfacción a causa del desastre del Prestige y de la posible iniciación de la guerra contra Irak.

Concretamente, las instituciones fijas por las que se pregunta todos los meses han ganado entre una y tres décimas respecto al mes pasado mientras que las instituciones por las que se pregunta solo uno (o algunos meses al año) reciben en todos los casos peores valoraciones que la última vez que se preguntó por ellas. El ranking de valoración de instituciones este mes es el siguiente: La Corona (6,3 puntos), la Unión Europea (6,1), la ONU (5,6), las Fuerzas Armadas (5,2), la OTAN (4,6), los Bancos (4,5), y el Gobierno de la Nación (4,4 puntos).

En cuanto a la valoración de líderes políticos, todos pierden décimas respecto al mes pasado o a la última vez que se preguntó por ellos (con la excepción de Aznar y Felipe González, que ganan dos décimas cada uno desde el mes pasado). Concretamente, las valoraciones este mes son las siguientes: Infanta Cristina (6,6 puntos en una escala de 0 a 10), Felipe González (5,2 puntos), José Luis Rodríguez Zapatero (5,0), José M^a Aznar (4,1), Gaspar Llamazares (3,6), Manuel Fraga (3,2) y Juan José Ibarretxe (3,0 puntos). Aunque no es infrecuente que Felipe González aventaje a

Rodríguez Zapatero en valoración (ha empatado con él e incluso le ha superado en varias ocasiones a lo largo de los últimos doce meses), sí debe resaltarse que no lo había hecho desde febrero del 2002. Por otra parte, la diferencia entre la valoración de Rodríguez Zapatero y Aznar, que ha sido habitualmente de medio punto porcentual o menos, ha aumentado hasta alrededor de un punto porcentual durante los últimos tres meses.

En cuanto a la intención de voto estimada, y en consonancia con el resto de los indicadores, se mantiene la ventaja a favor del PSOE ya observada el mes pasado (una diferencia de 1,7 puntos porcentuales). Se han sugerido anteriormente los argumentos que podrían explicar esta situación, y por tanto no se repiten aquí. Por otra parte, y como se indicó ya el mes pasado, el recuerdo de voto para el PP lleva varios meses siendo subestimado en mayor medida que en meses precedentes (cinco puntos porcentuales este mes), lo que no parece atribuible a un error muestral, ya que ese error tendría que haberse cometido varios meses seguidos, algo poco probable pues no se ha detectado ninguna anomalía que haya podido producir un sesgo especial en la extracción de la muestra. Más bien hay que interpretar que cuando los electores comienzan a negar haber votado a un partido en proporciones importantes (en este caso el PP), y cuando por el contrario se sobre-estima el voto a otro partido (en este caso la proporción que afirma haber votado al PSOE en el 2000 ha sido superior a tres puntos porcentuales los dos meses precedentes y un punto y medio este mes), es que se están modificando significativamente las intenciones reales de voto para unas futuras elecciones.

LA ACTUALIDAD

Las cuestiones de actualidad que se han analizado en el sondeo de este mes de enero son las siguientes: las consecuencias de la crisis del “Prestige”, la reforma de la legislación penal, la igualdad o desigualdad deseada entre Comunidades Autónomas, la reforma del PER, las relaciones de España con Marruecos, la situación internacional en Irak, Corea del Norte y Venezuela, la presencia española en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, y la valoración de líderes del PP y la sucesión de Aznar.

Consecuencias de la Crisis del “Prestige”

La valoración de las instituciones en relación con la crisis del Prestige ha mejorado significativamente desde el mes pasado, primero porque la gente ha tenido más y más diversificada información, después porque el Gobierno reaccionó y ha llevado a cabo numerosas acciones que han mejorado el clima de opinión no solo para él, sino para las instituciones en

general, y finalmente, porque la crisis ha ido poco a poco remitiendo. Se ha preguntado este mes por las mismas instituciones que el mes pasado excepto “el Gobierno Inglés” (que pasó a segundo término hablando en términos de protagonismo en los medios), y se han añadido “el pueblo español en general” y “la Familia Real”. Pues bien, la población gallega es otra vez la que recibe la mejor valoración (8,5 puntos en una escala de 0 a 10 este mes, 8,2 puntos el mes pasado), seguida de la población española en general (8,3 este mes, ya que no se preguntó por ella el mes pasado), la Familia Real (6,3 este mes), las Fuerzas Armadas (6,1 este mes y 4,3 en diciembre), los medios de comunicación (5,9 este mes y 5,7 el pasado), la Unión Europea (4,2 y 3,5 respectivamente), la Xunta de Galicia (4,1 y 3,6), y el Gobierno Español (3,3 ahora y 3,3 en diciembre) que es la única institución que recibe la misma valoración que en diciembre, además de ser la más baja en ambas ocasiones. Pero estos datos demuestran que el clima general ha mejorado significativamente entre diciembre y enero.

Más de la mitad de los entrevistados opinan que la catástrofe del Prestige tendrá consecuencias en las próximas elecciones autonómicas y locales en Galicia, y un 42% creen que también las tendrá en esas mismas elecciones en el resto de España. Además, un 31% adicional cree en ambos casos que “probablemente” tendrá consecuencias.

Más concretamente, un 77% de los entrevistados opinan que el PP será el partido más perjudicado en las próximas elecciones autonómicas y municipales gallegas y un 70% creen igualmente que ese mismo partido será el más perjudicado en las esas mismas elecciones en el resto de España.

Pero, contrariamente, un 45% y un 50% respectivamente opinan que el PSOE será el partido más beneficiado a causa del Prestige en las próximas elecciones autonómicas y municipales en Galicia y en el resto de España respectivamente. Además, un 12% de los entrevistados mencionan al BNG como el partido que más beneficiado resultará por la crisis del Prestige en las citadas elecciones en Galicia. Pero un 14% y un 18% de los entrevistados opinan respectivamente que ningún partido se verá beneficiado por la crisis del Prestige en las elecciones autonómicas y locales, tanto en Galicia como en el resto de España.

Teniendo en cuenta que la “marea negra” comenzaba a llegar a las costas francesas cuando se redactó el cuestionario, se aprovechó para pedir a los entrevistados que comparasen la reacción del Gobierno Francés con la del Gobierno Español en cuanto a las medidas adoptadas para luchar contra las consecuencias de esa catástrofe, aunque era obvio que el Gobierno Francés

había tenido más tiempo para preparar su reacción, y además había podido tomar nota de los errores cometidos por el Gobierno Español para no repetirlos. Por ello no debe evaluarse como importante la diferencia en puntos porcentuales de las proporciones que mencionan a uno o a otro gobierno como habiendo actuado mejor. En efecto, un 19% de los entrevistados opinan que el Gobierno Español es el que ha actuado mejor, frente a un 28% que opinan que actuó mejor el Gobierno Francés. Además, un 16% opinan que ninguno de los dos gobiernos actuó bien, y un 12% opinan que los dos actuaron igual.

Por último, se pidió a los entrevistados que evaluaran mediante una escala de cinco puntos su grado de acuerdo o desacuerdo con un conjunto de frases relativas a la crisis del Prestige. Se ha podido así observar la existencia de un muy alto grado de acuerdo con las siguientes afirmaciones:

“La Xunta no ha estado a la altura de las circunstancias” y
“Si Aznar hubiese ido a Galicia durante los primeros días, el Gobierno se habría ahorrado muchos problemas”.

Existe un acuerdo moderado con las siguientes afirmaciones:

“Muchos han aprovechado para obtener subvenciones e indemnizaciones que no les correspondían” y

“El BNG ha aprovechado este incidente para fomentar el nacionalismo gallego y en contra del sentimiento español”.

Se observa una opinión controvertida, pero con tendencia al desacuerdo, respecto a otras dos afirmaciones:

“El Gobierno de la Nación lo hizo mal al principio, pero luego rectificó y tomó las medidas adecuadas”, y

“Al final de la crisis, el PSOE ha quedado peor que el Gobierno, pues se ha comprobado que solo quería obtener beneficios electorales, en lugar de solucionar los problemas”.

Y, finalmente, hay un desacuerdo muy evidente respecto a que:

“Se ha exagerado el problema del Prestige por razones políticas y electorales” y

“Se diga lo que se diga el Gobierno Español y la Xunta han estado muy coordinados”.

La Reforma de la Legislación Penal

ASEP ha indicado en numerosas ocasiones que la opinión pública española deseaba endurecer las penas impuestas a los terroristas, y especialmente la exigencia de que las penas se cumplieran en su integridad, así como que impusieran penas más duras a los delincuentes reincidentes. De igual manera, la opinión pública siempre se ha mostrado de acuerdo con la expulsión de los inmigrantes ilegales o no documentados, pero de acuerdo igualmente en que, mientras no se les expulse, los inmigrantes no documentados deberían tener derecho a trabajar. El Gobierno ha impulsado finalmente una reforma del Código Penal para modificar algunos aspectos en la línea que deseaba la mayoría de los españoles.

Concretamente, las proporciones de entrevistados que se muestran “muy de acuerdo” o “más bien de acuerdo” con cada una de las medidas que se indican a continuación son las siguientes:

Ampliación de 30 a 40 años de prisión para los delitos de terrorismo	89%
Idem para otros delitos muy graves	85%
Idem para los delitos de apropiación de dineros públicos	84%
Supresión de la libertad condicional para delincuentes reincidentes	68%
Devolución del dinero sustraído para que puedan acceder al tercer grado quienes se hayan apropiado de dineros públicos	67%
Colaboración con las Fuerzas de Seguridad para que los terroristas puedan acceder al tercer grado	57%

Como puede comprobarse, más de la mitad de los españoles están de acuerdo con cada una de las medidas citadas, y las proporciones en contra no superan en ningún caso más del 28%, puesto que siempre hay quienes no tienen opinión o no quieren expresarla.

Pero se ha querido ir algo más allá, y puesto que la reforma impulsada por el Gobierno habla de ampliar la pena de prisión desde 30 a 40 años para “otros delitos muy graves”, se ha preguntado a los entrevistados a qué otros delitos, aparte de los de terrorismo y los de apropiación de dineros públicos, aplicarían ese incremento de pena de prisión. Aunque la pregunta era abierta, sin sugerir ninguna respuesta, y teniendo en cuenta que los entrevistados podían mencionar más de un tipo de delitos, son muy importantes las proporciones que mencionaron diferentes delitos, de manera que un 56% señalaron a los “asesinos en general”, un 48% a los

violadores, alrededor de un 25% a los traficantes de drogas, a los responsables de maltratos en el hogar y a los pederastas, y un 3% a otros tipos muy variados de delitos.

Y, finalmente, se pidió a los entrevistados que indicaran qué delitos, en su opinión, merecerían “cadena perpetua, es decir, hasta morir en la cárcel”, y qué delitos (si es que alguno), merecerían la pena de muerte. Debe recordarse que ninguna de estas dos penas está actualmente admitida en la legislación penal española, ni tampoco lo está en la reforma ahora impulsada por el Gobierno. Aún así, y teniendo en cuenta que, una vez más, la pregunta era abierta y múltiple, en el sentido de que no se sugería ningún tipo de delito y que el entrevistado podía mencionar más de un tipo de delitos, las proporciones de entrevistados que contestaron fueron muy elevadas, lo que sugiere la importancia que para los españoles parece tener esta reforma de la legislación penal.

De manera más concreta, un 54% de los entrevistados opina, espontáneamente, que los asesinos terroristas merecerían la “cadena perpetua hasta morir en la cárcel”, y un 18% incluso cree que merecerían la pena de muerte. Estas proporciones disminuyen hasta un 38% y un 10% respecto a los asesinos en general. Y, además, alrededor de un 25% en cada caso mencionaron la cadena perpetua para los “maltratos conyugales que acaban en asesinato” y las violaciones de menores, algo menos del 20% mencionan a los traficantes de droga y los pederastas, y alrededor del 10% para los que se apropian de dineros públicos. Pero aparte de los dos tipos de delitos mencionados, ningún otro es mencionado por más de un 6% de los entrevistados como merecedor de pena de muerte.

Deseos de Igualdad o Diferenciación entre Comunidades Autónomas

Se han repetido ahora las mismas preguntas que ya se realizaron en marzo de 1999 respecto al grado de importancia que atribuían los españoles a la igualdad entre Comunidades Autónomas respecto a diversas prestaciones y servicios recibidos de las administraciones públicas y respecto a la unidad y los símbolos de todos los españoles. Y, además de la importancia atribuida a cada una de estas cuestiones, se pidió a los entrevistados que indicaran en qué medida estaban o no de acuerdo con la política seguida por el Gobierno respecto a cada una de ellas.

En cuanto al grado de importancia, se ha observado que más del 90% de los entrevistados asignan mucha o bastante importancia a que la asistencia sanitaria pública, la enseñanza pública, la cuantía de las pensiones y los impuestos que se pagan, “sean iguales en cualquier lugar de España”.

Además, un 87% de los entrevistados asignan mucha o bastante importancia a que se mantenga la unidad de España, y un 65% se la asignan también a que los símbolos nacionales (la bandera, el himno, la lengua) tengan prioridad (preferencia) sobre los símbolos autonómicos. Todos estos resultados son casi iguales que los obtenidos en 1999, sin que se observe ninguna diferencia que sea ni siquiera un poco significativa, aunque debe resaltarse que todas las cifras mencionadas son muy levemente inferiores a las de 1999.

Además, un 68% de los entrevistados se muestra muy o más bien de acuerdo con las actuaciones del Gobierno para que se mantenga la unidad de España, más de un 50% están de acuerdo con sus actuaciones para que la asistencia sanitaria pública, la enseñanza pública, la cuantía de las pensiones y los impuestos que se pagan, sean iguales en cualquier lugar de España, y un 49% están de acuerdo con las actuaciones del Gobierno para que los símbolos nacionales tengan prioridad sobre los símbolos autonómicos. Debe subrayarse que la razón por la que estas proporciones son más bajas que en la pregunta anterior se debe a que en aquella escala solo se contemplaban cuatro categorías de respuesta, mientras que en esta se admitía un punto medio en la escala (“no se, no tengo opinión), además de la respuesta habitual incluida en ambas escalas para los que no contestaron a la pregunta. Pero además, se puede considerar muy importante mantener la unidad de España y no estar de acuerdo con las actuaciones del Gobierno para lograrlo. En cualquier caso, todos los resultados son prácticamente iguales a los de 1999, solo que algo más bajos, con una sola excepción, y es que la proporción de los que se muestran de acuerdo en que se mantenga la unidad de España ha aumentado en cuatro puntos desde 1999 hasta el presente, un dato que debe tomarse muy en cuenta a pesar de lo pequeña que es la diferencia, precisamente porque es el único caso en que el cambio ha sido para aumentar y no para disminuir.

La Reforma del PER

Cuando se elaboró el cuestionario, y cuando se realizaron las entrevistas, los sindicatos habían mostrado públicamente su rechazo a la propuesta de modificación del subsidio agrario elaborada por el Ministerio de Trabajo para sustituir al que fue suprimido por el denominado “decretazo” de antes del verano del 2002. En realidad, se trataba de la única medida no rectificada por el Gobierno después de su confrontación con los Sindicatos que incluso condujeron a una Huelga General cuyas cifras de seguimiento fueron muy controvertidas. Así pues, en las fechas en que se redactaron las preguntas y se realizó el trabajo de campo los Sindicatos no solo habían

rechazado la propuesta del Gobierno, sino que habían ya anunciado otra huelga, limitada esta vez a Andalucía y Extremadura, para el mes de febrero.

Mediante un conjunto de frases respecto a las que el entrevistado debía mostrar su grado de acuerdo o desacuerdo, se ha medido la opinión de los españoles respecto a la propuesta del Gobierno y su rechazo por parte de los Sindicatos.

Así, se ha podido observar un alto grado de acuerdo con dos de estas afirmaciones:

“Los Sindicatos tienen que estar siempre exigiendo más y más mejoras, porque de otro modo perderían el apoyo de los trabajadores”, y

“Los Sindicatos han hecho bien en rechazar la propuesta del Ministerio, porque su obligación es siempre pedir más para los trabajadores, aunque no sea razonable”.

Parece existir una opinión controvertida, aunque con tendencia al desacuerdo, respecto a otras dos afirmaciones:

“La convocatoria de huelga será un fracaso, porque no es razonable en esta ocasión”, y

“Los Sindicatos están totalmente debilitados, y solo sobreviven porque el Gobierno les subvenciona y les da ocasión para que puedan hacer su papel reivindicativo de vez en cuando”.

Pero se observa un desacuerdo mayoritario más claro, aunque no de manera absoluta, con otras dos afirmaciones:

“La propuesta de sustitución del PER que ha hecho el Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales debería ser aceptada por los Sindicatos”, y

“Hay que suprimir el PER por completo, pues ha sido un fraude que solo servía para comprar votantes para el partido en el poder”.

Como se sabe, al redactar este análisis se ha hecho pública la aceptación por los Sindicatos de la propuesta elaborada por el Gobierno relativa al antiguo PER, que ahora se denomina “Renta agraria”.

Las Relaciones entre España y Marruecos

Parece indiscutible que, desde la reunión en Madrid de los ministros de Asuntos Exteriores de Marruecos y España, las relaciones entre ambos países han entrado en una fase en la que, si bien no se puede todavía hablar de buenas relaciones, sí se puede afirmar que es una fase en la que ambos países están haciendo esfuerzos por entenderse y por abrir puertas de negociación y diálogo, reduciendo por el contrario todo aquello que pueda enturbiar este nuevo clima de relaciones.

De manera más concreta, una cuarta parte de los entrevistados opina que las relaciones entre los dos países desde la visita a España del Ministro marroquí de Asuntos Exteriores, Benaisa, son ahora mucho mejores o algo mejores que antes, frente a solo un 11% que opinan que son algo o mucho peores que antes, un 39% que afirman que son más o menos igual que antes, y otro 25% que no opina en absoluto.

Se ha repetido la pregunta ya incluida en el sondeo ASEP de diciembre, en la que se preguntaba por las actuaciones que debería llevar a cabo España para mejorar las relaciones con Marruecos, y que, aún siendo una pregunta cerrada (pues se sugerían diversas respuestas, incluida la posibilidad de mencionar cualquier otra actuación no citada entre las sugeridas), permitía la respuesta múltiple, razón por la cual los porcentajes no suman 100%. Los primero que debe destacarse es precisamente eso, que en este sondeo de enero los entrevistados han podido mencionar más de una respuesta, mientras que en diciembre solo podían escoger una respuesta.

Aún así, las dos respuestas más mencionadas en ambos sondeos son las relativas a “incrementar la cooperación económica mediante inversiones en Marruecos” y “firmar convenios para incrementar la inmigración de marroquíes pero con contratos de trabajo”. En menor proporción se mencionan también como actuaciones que debería llevar a cabo España las de “aumentar los programas de cooperación en materia de becas para que estudiantes marroquíes puedan estudiar en España” y las de “incrementar nuestras importaciones de Marruecos”. Pero, al igual que en diciembre, apenas fueron mencionadas (menos del 5% incluso ahora en enero, a pesar de poder mencionar varias respuestas) otras actuaciones, como las de “dejar que Marruecos se anexe el Sahara sin exigir un referéndum”, “ceder a Marruecos Ceuta y Melilla”, o “ceder islotes y pequeños territorios como Perejil, pero no Ceuta y Melilla”.

La Situación Internacional

Varios han sido los temas relativos a la situación internacional que se han tratado en el sondeo ASEP de enero, y entre ellos destaca, como es obvio, la situación pre-bélica entre Estados Unidos (y sus aliados) e Irak.

A medida que se acerca la fecha en que los Estados Unidos pueden iniciar la ofensiva sobre Irak, parece conveniente precisar cuál es la opinión de los españoles sobre las condiciones en que considerarían aceptable el inicio de la guerra contra Irak. Un 4% de los entrevistados afirma que “los Estados Unidos y otros países aliados tienen todo el derecho a intervenir militarmente en Irak para proteger el abastecimiento de petróleo a nuestros países”, un 8% opinan que “los Estados Unidos y otros países aliados deben intervenir militarmente en Irak para prevenir un posible ataque militar con armas de destrucción masiva de Irak a otros países”, un 20% dicen que “los Estados Unidos y otros países aliados deben intervenir militarmente en Irak solo si las Naciones Unidas autorizan esa intervención, pero no deben intervenir si no hay esa autorización”, pero un 48% de los entrevistados afirman que “los Estados Unidos y otros países aliados no deben intervenir militarmente en Irak en absoluto mientras este país no haya atacado a otro”. En otras palabras, un 48% de los entrevistados no aceptarían la intervención en Irak mientras ese país no ataque a otro, pero un 32% admitirían el ataque en determinadas circunstancias, si bien es cierto que de la mayor parte de estos (un 20% concretamente) solo admitiría el ataque si las Naciones Unidas lo autorizan, mientras que el 12% restante estarían dispuestos a admitir el ataque por razones preventivas o económicas. Debe resaltarse asimismo que, a pesar de la gran notoriedad de la crisis entre Estados Unidos e Irak, un 20% de los entrevistados no opinan sobre esta cuestión.

En cuanto a las razones que los entrevistados perciben como explicativas de por qué los Estados Unidos tienen tanto interés en invadir Irak, las más mencionadas son: “porque Irak es uno de los principales productores de petróleo en el mundo” y “porque los Estados Unidos quieren dominar todo el Golfo Pérsico (Oriente Medio) porque es la mayor reserva petrolífera del mundo, y al atacar a Irak piensan luego continuar con otros países árabes como Arabia Saudita, Siria, Irán y otros para asegurarse el control del petróleo”. Estas dos respuestas fueron mencionadas por casi la mitad de los entrevistados (ya que podían mencionar hasta dos respuestas cada uno), pero en cambio, solo una cuarta parte de los entrevistados cree que la razón por la que los Estados Unidos quieren invadir Irak es “porque Irak respalda y financia el terrorismo internacional de los fundamentalistas islámicos, como la red Al Qaeda de Ben Laden”, y proporciones aún menores dicen

que “porque Saddam Hussein es un dictador y los países democráticos tienen la obligación de eliminar a los dictadores y ayudar a establecer democracias en todo el mundo” o “porque Estados Unidos quiere proteger a Israel y para ello necesita someter militarmente a todos los países árabes de su entorno”. En otras palabras, los españoles piensan que es el petróleo, y no ninguna otra razón, la que explica el interés de los Estados Unidos por invadir Irak.

Cuando se pregunta a los entrevistados por qué creen que los Estados Unidos no parecen tener intenciones de atacar a Corea del Norte, a pesar de que este país, a diferencia de Irak, ha expulsado a los inspectores de Naciones Unidas, y ha reconocido tener armas nucleares y tener la intención de proseguir su programa de investigaciones nucleares, más de la mitad de los entrevistados no responde, y las respuestas se distribuyen entre varias de ellas, sin que ninguna fuese mencionada por más de un 10% de los entrevistados.

Otro foco de tensión es Venezuela. Se preguntó a los entrevistados por la principal razón que, en su opinión, explica las revueltas que se han producido en ese país desde hace meses. Y las dos razones más mencionadas, por un tercio y una cuarta parte de los entrevistados respectivamente, son que: “la mayoría del pueblo está contra el Presidente Chavez porque le consideran un dictador y un mal gobernante”, y que “la mayoría de la población pasa hambre porque el Gobierno de Chavez no sabe gestionar la economía”. Solo un 11%, en este caso, atribuye a los Estados Unidos el apoyo a la oposición de Chavez para lograr el control del petróleo venezolano, y una proporción aún más pequeña (3%) piensa que “la mayoría del pueblo respalda al Presidente Chavez....”.

La Presencia de España en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas

Desde enero de este año España forma parte del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, y en su calidad de tal tendrá que decidir sobre cuestiones relacionadas con los conflictos en todo el mundo. Así, se preguntó a los entrevistados qué debería votar España en el supuesto de que el informe de los inspectores enviados por Naciones Unidas a Irak indicase que no hay evidencia de que Irak tenga armas de destrucción masiva, y qué debería votar España en el supuesto de que dicho informe demostrase que Irak tiene armas de destrucción masiva. En el primer supuesto, un 60% de los entrevistados afirman que España debería votar en contra de intervenir militarmente en Irak, pero si se demostrase que Irak tiene armas de destrucción masiva, todavía un 34% de los entrevistados opinan que España debería votar en contra de intervenir militarmente en Irak, pero un

28% afirman que su voto debería depender de lo que opine la Unión Europea. Solo un 13% de los entrevistados, en este supuesto, opinan que España debería votar a favor de intervenir militarmente en Irak.

Una segunda cuestión es la relativa a Corea del Norte. En el supuesto de que se pusiera a votación la propuesta de intervenir militarmente en Corea del Norte, país que ha aceptado tener y estar dispuesto a producir y utilizar armas de destrucción masiva, un 42% de los entrevistados opina que España debería votar en contra de intervenir militarmente en Corea del Norte, y un 27% de los entrevistados creen que debería votar según lo que opine la Unión Europea.

En tercer lugar, el conflicto entre Israel y Palestina. Si se pusiese a votación en el Consejo de Seguridad a favor de obligar a Israel a aceptar el establecimiento de un estado Palestino, un 41% de los entrevistados opinan que España debería votar a favor de su creación, y un 17% opinan que el voto debería depender de lo que opine la Unión Europea. Pero en el supuesto de que Israel se opusiera a la creación de ese estado palestino, un 26% seguiría pensando que España debería votar a favor de su creación, y un 25% opinan que su voto debería depender de lo que opine la Unión Europea.

Finalmente, si se pusiera a votación en el Consejo de Seguridad la celebración de un referéndum en el Sahara para que ese pueblo decida si quiere ser independiente o quiere formar parte de Marruecos, un 47% de los entrevistados opinan que España debería votar a favor de celebrar el referéndum, y otro 15% opinan que el voto de España debería depender de lo que opine la Unión Europea. Pero, en el supuesto de que Marruecos se opusiera a la celebración del referéndum, un 28% seguiría opinando que España debería votar a favor de celebrar el referéndum, pero un 26% opina que el voto de España debería supeditarse a la opinión de la Unión Europea.

La Valoración de Líderes del PP y la Sucesión de Aznar

La sucesión de Aznar sigue como trasfondo de las opiniones de los españoles sobre la mayoría de las cuestiones que tienen mayor notoriedad en la actualidad, especialmente en los medios de comunicación. Por ello, se ha vuelto a preguntar este mes otra vez por la valoración de los ministros y otros líderes del PP, y por las posibilidades que algunos de ellos tienen de suceder a Aznar.

En este sentido, se ha preguntado por la imagen de todos los ministros y por tres líderes del PP que, no siendo ministros, “suenan” como posibles sucesores de Aznar: Jaime Mayor Oreja, Loyola de Palacio y Alberto Ruiz Gallardón.

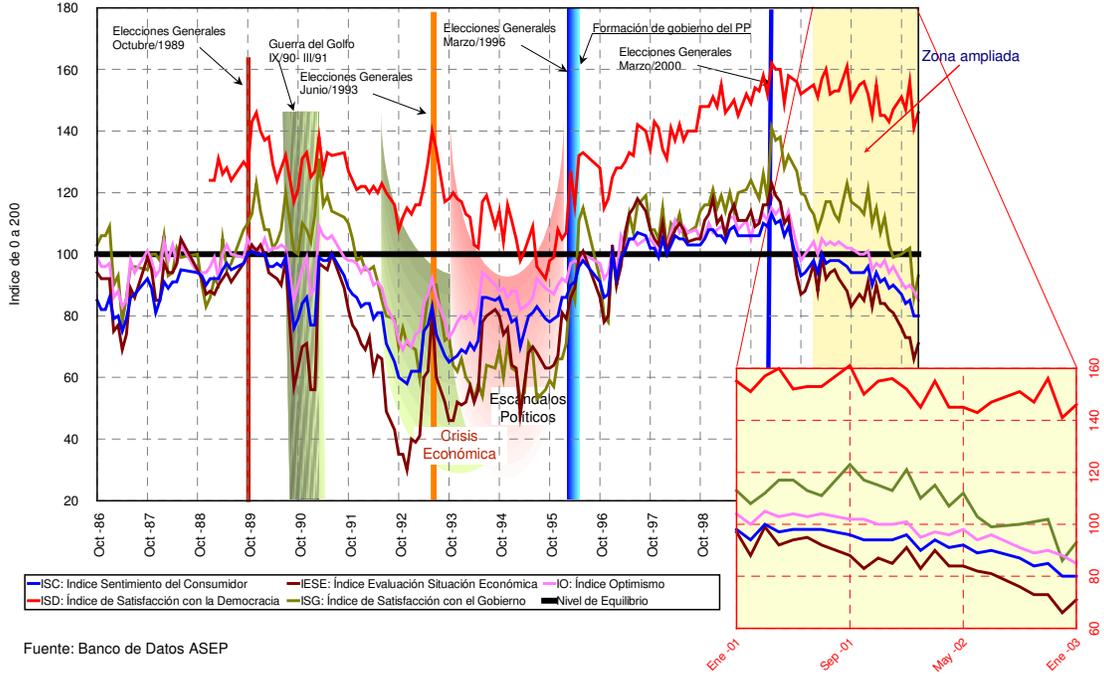
Debe indicarse, en primer lugar, que la notoriedad de los ministros ofrece una gran variación, de manera que, mientras más del 80% de ellos opinan sobre Rato, Rajoy, Arenas y Mayor Oreja, alrededor de tres cuartas partes opinan sobre Zaplana, Piqué, Alvarez Cascos, Trillo, Ruiz Gallardón y Loyola de Palacio, dos terceras partes opinan sobre Ana Palacio, Pilar del Castillo, Acebes, Montoro y Arias Cañete, y más del 50% opinan sobre Matas, Michavila y Ana Pastor.

En cuanto a la valoración, parece que la crisis del Prestige, aunque tuvo sus mayores efectos negativos en el sondeo del mes de diciembre, todavía influye negativamente sobre la imagen de todos los miembros del Gobierno, de manera que todas las valoraciones son este mes más bajas en al menos cinco décimas a las obtenidas en el pasado mes de septiembre, aunque el ranking es prácticamente el mismo en ambas fechas. La valoración más alta corresponde a Jaime Mayor Oreja (4,7 puntos en una escala de 0 a 10 puntos). Le siguen, con valoraciones superiores a los 4 puntos, Ruiz Gallardón, Rajoy y Rato. Zaplana y Loyola de Palacio tienen exactamente 4 puntos, y Arenas, Trillo, Ana Palacio, Acebes y Ana Pastor les siguen con 3,9 puntos, mientras que Michavila obtiene 3,8 puntos, Montoro y Pilar del Castillo 3,7 puntos, Piqué 3,6 puntos, y Alvarez Cascos, Matas y Arias Cañete 3,5 puntos.

En cuanto a las posibilidades que distintos candidatos tienen de suceder a Aznar, según los entrevistados, se preguntó por ocho de ellos, si bien el entrevistado podía mencionar espontáneamente a cualquier otro. Debe indicarse que un 46% de los entrevistados no responde a esta pregunta, posiblemente porque no están informados, no son votantes ni simpatizantes del PP, etc. Pero los candidatos mencionados por proporciones más elevadas de entrevistados como con posibilidades de suceder a Aznar son Mayor Oreja (17%), Rajoy (11%) y Rato (10%).

Se ha preguntado este mes también por el candidato que el entrevistado desearía que sucediese a Aznar, pero un 57% tampoco contesta en esta ocasión, si bien el candidato más preferido parece ser Mayor Oreja (15%), sin que ningún otro sea citado por una proporción superior al 10%.

EVOLUCION DE LOS INDICADORES MAS SIGNIFICATIVOS



Fuente: Banco de Datos ASEP